

POLÍTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y MOVILIZACIÓN POPULAR

Policies of social economy and popular mobilization

AUTORA

Lucrecia Gusmerotti

lucreciagusmerotti@yahoo.com.ar

<http://orcid.org/0000-0002-8508-1537>

Estructura Social y Procesos Políticos Argentinos

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Universidad Nacional de La Plata

República Argentina

Resumen

Palabras clave

Estado
cooperativas
Movimiento Evita
iniciativas políticas

Este artículo aborda una problemática relevante en ciencias sociales: las relaciones entre políticas estatales, movilización social y formas de gestión del trabajo en conjuntos subalternos. Desde un enfoque etnográfico, político y relacional aquí se propone el análisis de las intervenciones estatales y las experiencias colectivas de organización a partir de un caso de estudio: el Movimiento Evita en la localidad de Avellaneda entre los años 2009 y 2014.

Abstract

Keywords

State
cooperative
Movement Evita
political initiatives

This article approaches a relevant problematic in social sciences: the relations between state policies, social mobilization and forms of management of the work in secondary sets. From an ethnographic, political and relational approach here one proposes the analysis of the state interventions and the collective experiences of organization from a case of study: the Movement Evita in Avellaneda's locality between the year 2009 and 2014.



Esta obra está bajo
una Licencia Creative
Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar
4.0 Internacional.

POLÍTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y MOVILIZACIÓN POPULAR

Un abordaje de investigación en clave etnográfica

Por Lucrecia Gusmerotti

Introducción

El presente artículo se articula a partir de los avances¹ de un proyecto de investigación que integra el plan de actividades de la cátedra Estructura Social y Procesos Políticos Argentinos. El proyecto se ocupa de la articulación analítica entre los dispositivos estatales y el proceso de construcción de iniciativas políticas en torno a las cooperativas de trabajo durante los gobiernos «kirchneristas». Para este trabajo se recuperan materiales de un trabajo de campo realizado entre los años 2009 y 2014 en el Movimiento Evita de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

La exposición está organizada en tres apartados, en el primero de éstos reseñan las principales líneas que constituyen la agenda de investigación sobre la temática y se presentan a continuación las claves del enfoque propio. En el segundo apartado se caracteriza la movilización de organizaciones populares y sus vínculos con el Estado en relación a la demanda de trabajo en las últimas décadas. Por último se despliega el caso: se reconstruye la trayectoria del movimiento local, definida como unidad de análisis, desde su organización como un movimiento de desocupados hasta su alineamiento político actual. Luego se describe el proceso de conformación de cooperativas de trabajo, incorporando las dinámicas de movilización desplegadas recientemente por este movimiento, en torno al trabajo asociativo.

Los resultados de la investigación apuntan a que la demanda de «trabajo digno» configurada en el marco de continuidades históricas, se reformula y revitaliza como eje de construcción y acción política en el contexto de los gobiernos «kirchneristas». De este modo se registra que en consonancia con las luchas precedentes, durante la última década la «dignidad» del trabajo asume rasgos particulares: se asocia a la creación de una nueva institucionalidad y a la ampliación de los derechos y protecciones laborales para los trabajadores de la «economía social o popular».

La agenda de la producción académica sobre la temática

En las últimas dos décadas cobraron relevancia en Argentina múltiples experiencias de autogestión orientadas a grupos sociales definidos como vulnerables en relación a sus condiciones de vida. Recientemente estas formas asociativas fueron incentivadas por una política gubernamental centrada en la promoción de la economía social. Estas experiencias se inscriben en la acción colectiva de diversas organizaciones populares, que movilizaron la demanda de trabajo genuino frente a los procesos de intensificación de la desigualdad social y precarización laboral promovidos por las reformas estructurales de mediados del siglo pasado. En la producción académica dedicada al estudio de estos procesos pueden distinguirse dos líneas de investigación: una referida a la economía social y otra a los movimientos sociales y la acción colectiva.

La primera de estas líneas de investigación se centra en las problemáticas y desafíos de estas experiencias asociativas en el marco de la economía social. Sus principales ejes de discusión han girado en torno de la autonomía de estas prácticas respecto del mercado; sus vinculaciones con las relaciones capitalistas de producción y el Estado; la formulación e implementación de las políticas para el sector y la sustentabilidad de las experiencias. En este campo, algunas investigaciones destacan que estas organizaciones presentan un carácter innovador frente a la extensa tradición cooperativista en el país (Rofman y otros, 2004); generan procesos de re-colectivización laboral «desde arriba»-impulsados desde el Estado- y «desde abajo»- por iniciativas de organizaciones sociales-(Wyczykier, 2009). Otros estudios han señalado que implican formas alternativas de organización del trabajo (Deux Marzi y Vázquez, 2009; Hintze,

2010) y modos democráticos como la toma de decisiones por asambleas, la horizontalidad y solidaridad de las relaciones (Dal Ri y Vieitez, 2009). Mientras que desde algunas perspectivas se ha indicado que los modos de insertarse en el mercado o la rigidez de la organización laboral (Deledicque y otros, 2005) constituyen obstáculos para el desarrollo de formas alternativas de gestión del trabajo (Rebon y Salgado, 2009); otros se han preocupado por la sustentabilidad de las experiencias asociativas y su viabilidad en términos económicos y sociales (Hopp, 2012; Corragio, 2008).

Dentro de esta misma línea de investigación, algunas elaboraciones se han ocupado de la formulación de las políticas y el sujeto que éstas constituyen. En esa dirección advierten que se ha producido un desplazamiento desde el paradigma asistencial hacia otro en el que cobra fuerza la noción del trabajo como integrador social (Danani, 2004; Grassi, 2012; Vuotto, 2008). Por último, diversos estudios se han enfocado en la heterogeneidad de estas experiencias asociativas y debaten en torno a cómo debe ser conceptualizada esta otra economía caracterizada como «social», «solidaria», «alternativa o popular» (Guerra, 2007).

Sintetizando, desde esta primera línea de investigación, se ha interpretado la emergencia de formas asociativas como resultado de las estrategias de ciertos agrupamientos sociales en función de la defensa de valores como la «solidaridad, horizontalidad e igualdad», promoviendo una mirada que tiende a la reificación de prácticas sociales, o bien se ha presentado la emergencia del asociativismo como producto de la iniciativa estatal mediante el fomento de políticas públicas. En ambos casos, queda pendiente un análisis acerca de las formas concretas en que la agencia estatal modela prácticas de autogestión y en que las organizaciones sociales redefinen políticas estatales a través de sus propias acciones.

La segunda línea de investigación se focaliza en el estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva y puede ordenarse de acuerdo al tipo de problemas y abordajes. Un primer conjunto de estudios sociológicos analiza los procesos de conflictividad social en el contexto neoliberal de reformas estructurales centrándose en los ciclos de protesta, sus discontinuidades históricas, su carácter atomizado y su contenido cívico (Schuster y otros, 2005). Otros estudios parten de la relación entre los procesos de descolectivización social y la conformación de actores sociales, señalando la emergencia de nuevas identidades colectivas y formas de

politización (Svampa y Pereyra, 2003). Por lo general en estos trabajos se advierte un vacío explicativo en torno a la vinculación de las protestas con el contexto global de la vida cotidiana de los sujetos implicados en ellas. Por otra parte un segundo grupo de reflexiones se enfoca en las interacciones entre movimientos sociales, Estado y gobierno, planteando que la intervención estatal se define como respuesta al conflicto social (Campione y Rajland, 2006) en términos de «negociación, represión, cooptación» y que los movimientos se posicionan de acuerdo a sus matrices ideológicas en un marco generalizado de debilidad de los sectores populares (Svampa, 2005; Boron, 2007). A su vez hay investigaciones que actualizan debates sobre la autonomía/heteronomía de los movimientos y el lugar que estas nociones ocupan en las narrativas y tradiciones políticas (Masetti y otros, 2010, Natalucci, 2010). Por último, otros estudios han señalado que las diversas estrategias de los movimientos sociales frente al Estado, se explican por los cambios en el escenario político y los recursos disponibles en diferentes coyunturas (Gomez, 2010). En conjunto estas perspectivas no indagan acerca de la especificidad de los modos de relación entre Estado y movimientos, las disputas y tensiones que las configuran y las formas de redefinición cotidiana de éstos vínculos.

En discusión con las mencionadas líneas de investigación se han destacado estudios etnográficos sobre conjuntos subalternos y políticas sociales, que privilegian el análisis de la experiencia y prácticas cotidianas de los sujetos a partir del estudio de casos. En este campo, investigaciones sobre organizaciones de desocupados y barriales han focalizado sobre las categorías de las personas para dar cuenta de posturas en conflicto en torno a la gestión de programas sociales. (Ferraudi Curto, 2005). También hay etnografías que han descripto modos de «producción y circulación» de los recursos estatales en diferentes espacios organizativos (movimientos de desocupados, unidades básicas, barrios, municipio) desmontando críticamente los supuestos de la dicotomía «punteros y piqueteros» (Quirós, 2011); en tanto otros estudios han mostrado cómo los actores sociales experimentan y significan diferentes programas estatales en barrios populares o en instituciones eclesiales registrando procesos de implementación (Neufeld y otros, 2002; Zapata, 2005). Asimismo se describieron las rutinas estatales para la presentación de demandas, la especialización de las organizaciones en la gestión burocrática y los modos en que se definían en términos de «desarrollo» las políticas sociales (Pantaleon, 2004). A su vez, algunos trabajos han

evidenciado cómo se construyó históricamente la división de tareas entre «políticos» y «militantes», o entre «políticos» y «vecinos», en torno a las demandas de tierra y vivienda distinguiendo entre actividades técnicas y de movilización (Frederic, 2004).

El enfoque de investigación

Esta investigación forma parte del plan de actividades de la cátedra «Estructura Social y Procesos Políticos Argentinos» de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y se vincula con el proceso de realización de una tesis doctoral en curso.² En esa dirección este artículo abreva de perspectivas antropológicas que han realizado importantes contribuciones al estudio del problema del poder y la política y el Estado con conceptos como el de «Estado ampliado» de Gramsci o el de «gubernamentalidad» de Foulcault, vinculando estudios micro con contextos nacionales y globales (Gledhill, 2000). En esa línea el Estado es abordado como relación social y proceso de formación continua que se despliega en múltiples prácticas y regulaciones que pueden ser analizados desde sus «efectos», entendidos como una variedad de dispositivos y tecnologías de poder (Trouilliot, 2001; Fassín, 2003) o desde sus «márgenes», mediante el registro de rutinas burocráticas cotidianas sometidas a procesos de impugnación y contestación social de los sectores subalternos (Das y Poole, 2004). Desde esta perspectiva, se distingue entre «la política» como un aspecto primordial de la acción humana y la vida cotidiana (Vincent, 2002); y las «políticas estatales» consideradas en su formulación e implementación, como integrantes de un campo más amplio de relaciones de poder (Shore, y Wright, 1997). En este campo simultáneamente diversas producciones antropológicas han procurado resituar el análisis de los procesos de dominación y resistencia en el campo de las relaciones de hegemonía (Grimberg, 1997; Crehan, 2004; Rosberry, 2000). Estas investigaciones han reelaborado categorías como experiencia, tradición, transacción y lenguajes de demanda para el análisis de la movilización social en nuestro país. A partir del estudio de casos, se ha discutido con enfoques centrados exclusivamente en la acción colectiva o las identidades políticas, poniendo de manifiesto la relevancia de un abordaje antropológico de la política. De ese modo se describió cómo la desocupación se fue configurando como problemática en un escenario de disputa permeado por tradiciones políticas y gremiales, en el cual los programas

de empleo y acciones como el «piquete», se insertaban en trayectorias de vida y se constituían en expectativas (Manzano, 2007). También se analizó cómo la «recuperación» de una fábrica textil, más allá de una acción colectiva desplegada en la ocupación de empresas por sus trabajadores, constituía un proceso de construcción de demanda, en el que el trabajo era eje de reivindicaciones y significaciones en la vida y acción de las personas (Fernández Álvarez, 2009). A su vez se evidenció que los conjuntos subalternos activaban lenguajes y prácticas aprendidas en interacción con agencias estatales, en las cuales, tanto el Estado como las políticas eran redefinidos y configurados en el marco de tramas sociales cotidianas y procesos, que permitían identificar continuidades históricas (Grimberg, 2009). Inscribiéndose en estos planteos conceptuales la presente investigación estudia las articulaciones entre políticas estatales y procesos de gestión colectiva del trabajo, a partir de la dinámica de conformación de cooperativas de trabajo que se desarrolla en una organización del Movimiento Evita de la Provincia de Buenos Aires. En términos generales la reflexión apunta a los procesos de formación del Estado y los vínculos con los conjuntos subalternos integrando dos niveles de análisis: las políticas e intervenciones estatales y las experiencias cotidianas. Se trata entonces de identificar los nudos problemáticos de las formas de organización, las iniciativas y demandas cotidianas partiendo de la consideración del carácter histórico de las interacciones entre organizaciones populares y Estado, en las cuales «el trabajo» se destaca como un eje central de la construcción política.

El Estado, el trabajo y la dinámica de la movilización popular

Las relaciones entre los movimientos populares y el Estado han atravesado distintos momentos en el marco de procesos socio-históricas en los cuales los sujetos y las políticas públicas se configuran mutuamente. En este sentido, con perspectiva histórica se pueden identificar dos grandes etapas considerando en forma simultánea cómo la agencia estatal modela prácticas y experiencias sociales en torno a los programas de empleo y autogestión laboral; y cómo los movimientos populares redefinen políticas estatales perfilando al trabajo como vector de la construcción y productividad política. Para analizar el derrotero de la movilización social y las organizaciones populares diversos autores ubican la emergencia de los movimientos de trabajadores desocupados

entre los años 1996-1997 y señalan que abrevaron de experiencias y tradiciones y estructuras políticas preexistentes, comenzando su periodización en la década del ochenta (Merklen, 2005; Manzano; 2007). Pese a ello, dichas organizaciones se consolidan en el contexto de aplicación de las reformas estructurales, con la consecuente intensificación de los procesos de desigualdad social, distribución regresiva del ingreso y el incremento de la desocupación y la precariedad laboral. Es entonces desde mediados de la década del noventa hasta la crisis integral de 2001-2002, donde puede ubicarse la conformación de los movimientos de desocupados que, si bien desde sus orígenes estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, en conjunto y en el transcurso de estas trayectorias políticas, lograron construir repertorios de acciones comunes y estrategias de cooperación. En este contexto, la lógica de vinculación que se establece entre los movimientos populares y el Estado, aparece signada por una dinámica de movilización y negociación centrada en la ocupación de espacios públicos mediante diversas formas de protesta, como «piquetes», «marchas», «tomas», «ollas populares», en las cuales la demanda aglutinante es la de «trabajo digno y genuino» enmarcada en un lenguaje de reivindicación de derechos. Simultáneamente, los dispositivos estatales que se implementan en el contexto de la creciente conflictividad social consisten fundamentalmente en programas de transferencia directa de ingresos³, que implican contraprestaciones obligatorias de los beneficiarios. Como parte de las obligaciones impuestas por los programas estatales, en los barrios populares de las grandes ciudades se multiplican los «comedores» y «merenderos» comunitarios. En esa dirección, también el reclamo de mercaderías de consumo básico, acompaña la demanda de «planes» en las negociaciones con el Estado. A su vez, estas iniciativas de organización barrial se complementan progresivamente con la realización de talleres de oficios y diversas experiencias de autogestión laboral donde las actividades desarrolladas son concebidas como «trabajo» en el marco de las contraprestaciones exigidas. De este modo, los programas de empleo centrados en la transferencia directa de ingresos, al tiempo que permiten el desarrollo de prácticas políticas colectivas (Merklen, 2005), se constituyen en expectativas y son una fuente importante de significaciones en la vida y acción de las personas (Manzano, 2009). En este contexto, el trabajo paulatinamente se torna un espacio de articulación de prácticas y relaciones políticas alrededor del cual comienzan a ser reconocidas las organizaciones y movimientos populares, como interlocutores y administradores legítimos de los

recursos públicos obtenidos en la movilización y negociación con funcionarios gubernamentales.

Una segunda etapa puede identificarse a partir de mayo de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner al gobierno nacional. En esa coyuntura un conglomerado compuesto por diversos movimientos populares define durante el año 2004 su alianza política con el «kirchnerismo». Las primeras manifestaciones de este posicionamiento político, se expresan en la incorporación de sus dirigentes en esferas gubernamentales: por un lado participando de la gestión de espacios creados *ad-hoc* para los mismos, y en otros casos asumiendo como funcionarios de ámbitos institucionales existentes. Por otro lado también gradualmente estos movimientos desarrollan una dinámica electoral y se integran a espacios parlamentarios y políticos, en el marco de la llamada «transversalidad». Para estos agrupamientos la dinámica de movilización comienza a caracterizarse por acciones colectivas en las que se pretende expresar una adhesión al proyecto político «kirchnerista» y también en las que se busca manifestar un apoyo a determinadas iniciativas y políticas estatales.

En términos económicos, desde la asunción de Néstor Kirchner en adelante, se observa un mejoramiento de los índices de desocupación y de pobreza en un contexto de crecimiento económico sostenido. En relación con ello, la dinámica de la conflictividad popular se modifica sustancialmente respecto de los años previos y se destacan como uno de los principales protagonistas de la movilización social las organizaciones sindicales (Antón, 2010). De esta manera, se inaugura un ciclo de protestas «ofensivas» vinculadas a la negociación salarial y las condiciones de trabajo, que desplaza a los movimientos de desocupados como uno de los ejes dominante de la movilización social (Etchemendy y Ollier, 2008; Palomino, 2010). Sin embargo, pese al crecimiento económico y a la creación de empleo, importantes segmentos de la población económicamente activa persisten en condiciones de informalidad laboral y vulnerabilidad social. En esta segunda etapa estos sectores, son objeto de políticas estatales con foco en el desarrollo del trabajo autogestionado.

Según datos censales⁴ en el decenio comprendido entre 1991 y 2000 las cooperativas de trabajo en la Argentina eran 1.327. En cambio, en el período que va desde los años 2001 al 2006 las cooperativas habían ascendido a 6.938. Si se considera su distribución en el territorio nacional la provincia de Buenos Aires representa el 26,3% del total nacional.

Actualmente de acuerdo a la información que publica el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES⁻⁵, existen en nuestro país 30.998 cooperativas de las cuales la mayor parte, 24.486, son cooperativas de trabajo. Desde el año 2003 en adelante el impulso al trabajo cooperativo se desarrolla en el marco de programas de inclusión social del gobierno nacional mediante las resoluciones N.º 2038 y 3026 que simplifican la constitución de de estas formas asociativas y las benefician en términos de contribuciones sociales y cargas impositivas.

En ese marco, los movimientos de desocupados -a partir de la trama asociativa que habían desarrollado en el período anterior- establecen dinámicas de interacción con el Estado atravesadas por las políticas de fomento a la economía social. Este proceso se profundiza especialmente durante las administraciones de Cristina Kirchner con programas estatales como el Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST) «Argentina Trabaja» del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que masifica la conformación de estas formas asociativas.⁶ Hasta el momento son 7.781 las cooperativas de trabajo incluyendo la línea «Ellas Hacen» compuestas por mujeres.⁷

Estas experiencias de gestión colectiva representan actualmente un modo de organización y politización de los movimientos populares. En cuyo seno, y también desbordándolo, se construyen prácticas laborales e incipientes procesos de construcción de demanda en torno de las condiciones en que se realiza el trabajo asociativo en el contexto de la economía social. En este plano recientemente se vienen configurando discursos y dinámicas organizacionales que hacen eje en la precarización e informalidad laboral. Es a partir de esto último, que se formulan nuevos reclamos al Estado y se retoman acciones de protesta donde se significa una vez más en términos de «derechos» un conjunto de reivindicaciones y demandas. A continuación para describir estas reconfiguraciones se despliega el caso de estudio y se sitúan algunos elementos históricos que permiten contextualizar el surgimiento y desarrollo de las cooperativas de trabajo agrupadas en La Factoría, sede productiva del Movimiento Evita en Avellaneda.

La presentación del caso de estudio

Del Movimiento de Trabajadores Desocupados Resistir y Vencer (MTDRYV) al Movimiento Evita. Iniciativas políticas y políticas estatales en una trayectoria colectiva:

En el año 1996 un núcleo de militantes que compartía desde su juventud -a fines de la década del setenta- un recorrido político en lo que ellos llaman «el peronismo de izquierda» impulsa la conformación de un Movimiento de Trabajadores Desocupados en torno al problema del desempleo. Esa iniciativa se desarrolla en articulación con grupos eclesiales de base en barrios periféricos de la ciudad de Quilmes y también con militantes territoriales de las localidades de Avellaneda y Berazategui. A partir del año 2001, el movimiento agrega al MTD, la sigla «Resistir y Vencer», para diferenciarse de otras organizaciones que también se definen como Movimiento de Trabajadores Desocupados en la zona sur del conurbano bonaerense. De manera similar a otras organizaciones en este período, realizan petitorios, ollas populares y piquetes movilizando la demanda de «trabajo digno», reclamando cupos en los programas de empleo y alimentos. El 1º de mayo del año 2002 militantes del MTD RYV ocupan un edificio fabril cerrado durante diez años. El objetivo principal que guía la ocupación de La Factoría, según consta en sus documentos, es la realización de «proyectos de autogestión» que permitan «superar» la dinámica de contraprestación de los «planes» al incorporar a las personas vinculadas al MTD RYV en experiencias laborales más estables⁸. Durante los seis primeros meses los militantes se dedican centralmente a limpiar y acondicionar las instalaciones. Simultáneamente se definen los primeros «proyectos de autogestión»: un taller textil, una panificadora y una cervecería artesanal. Hacia el final de ese mismo año en elecciones nacionales Néstor Kirchner es elegido presidente y en mayo del año 2003, cuando asume formalmente el poder ejecutivo, convoca a dirigentes de diferentes movimientos de desocupados a la Casa Rosada. A esos encuentros preliminares asisten también militantes del MTD RYV y se alcanzan acuerdos clave⁹: la no represión de la protesta social, un incremento en el acceso a recursos públicos y el compromiso de los movimientos de intervenir más directamente en la gestión de las políticas sociales. En ese contexto durante el año 2004 un conjunto de organizaciones -entre las que se encuentra el MTD RYV, el MTD Evita y otros movimientos de desocupados- se agrupan en el Frente de Organizaciones Populares primero y en el Frente Patria para Todos después. En esos espacios se elaboran

documentos en los que se declara públicamente el apoyo a las iniciativas del gobierno nacional en torno a la política de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia, las alianzas internacionales y la deuda externa. En esos documentos se afirma que dichas decisiones gubernamentales coinciden con reivindicaciones históricas de los movimientos populares.¹⁰ Subrayando esas coincidencias, el MTDRYV, el MTD Evita y otros agrupamientos políticos, se fusionan en una única organización en el año 2005: el «Movimiento Evita».¹¹

Ese mismo año el dirigente nacional de dicha fuerza, Emilio Pérsico, asume en el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires como vice-jefe de gabinete. Durante la gestión que éste realiza hasta el año 2007, una de las líneas de acción institucional consiste en ampliar la participación de los movimientos populares en ámbitos de la gestión provincial, incorporando militantes y activistas en diferentes organismos públicos. En tanto que otra de las líneas de acción -siguiendo el curso de la orientación de las políticas nacionales de promoción de la economía social-, apunta a generar y consolidar las experiencias de «autogestión y producción» de los movimientos populares en el territorio provincial (Gusmerotti, 2010).

En sintonía con esta dinámica general en Avellaneda los militantes -agrupados inicialmente en el MTDRYV y luego en el Movimiento Evita- desarrollan desde el año 2003 experiencias de trabajo colectivo propiciadas por la implementación de programas estatales. En el año 2004 obtienen por primera vez un subsidio del programa «Manos a la Obra» del Ministerio de Desarrollo Social, para invertir en máquinas y materias primas. En esa dirección, los «emprendimientos» que inicialmente se habían organizado a partir de la ocupación de La Factoría, se equipan con máquinas nuevas y se expanden gradualmente en la medida que el movimiento suscribe convenios de producción con organismos públicos¹². Asimismo los programas nacionales de infraestructura social «Agua más Trabajo» o «Veredas más Trabajo», posibilitan que otras personas vinculadas al movimiento en ese distrito se incorporen como trabajadores a cooperativas coordinadas por el gobierno municipal. Estos trabajadores participan de ese modo de obras de infraestructura local como por ejemplo, la construcción de veredas, el tendido de cloacas o el armado y colocación de luminaria pública. Sin embargo, estas primeras experiencias asociativas no redundan en lo inmediato en la conformación de cooperativas de trabajo «del movimiento».¹³ Recién durante el año 2010 en

Avellaneda, se emprende la conformación de las cooperativas de trabajo dentro del PRIST.

Las cooperativas de trabajo y la movilización de demandas en los gobiernos «kirchneristas»

Tanto Ana como Rosa, están vinculadas al movimiento de desocupados MTDRYV desde mediados de la década del noventa. A lo largo de los años estrecharon sus vínculos con esa organización y sus militantes, partiendo de un acercamiento inicial marcado por su situación de desocupación. Ellas narran como un momento importante en sus vidas, la ocupación de La Factoría en el año 2002. En esa fecha ellas sitúan cambios significativos en su cotidianeidad, relacionados con las prácticas diarias vinculadas a la administración de los «planes» y a las acciones de protesta implicadas para obtenerlos. En 2009, al inicio del trabajo de campo, Ana y Rosa eran ya personas referenciadas por aquellos que circulaban regularmente por La Factoría. Fundamentalmente porque todos los días atendían y asesoraban a quienes se acercaban a averiguar sobre el programa de cooperativas u otros programas sociales que el movimiento gestionaba. También dentro de sus funciones habituales se destacaba la coordinación de las personas que ya trabajaban en ese lugar en talleres y emprendimientos laborales. Tomaban asistencia, otorgaban permisos, controlaban el cumplimiento de horario de trabajo y algunas otras rutinas internas. Siguiendo sus relatos, mostramos cómo las cooperativas se inscriben en una trayectoria más amplia de lucha dentro del movimiento:

Esto de las cooperativas nos hizo crecer del día a la noche. La responsabilidad. Nos costó mucho pegar el salto del comedor a administrar, organizar cooperativas. Es todo un desafío para nosotros porque al principio nos mirábamos las compañeras y decíamos ¿y ahora para donde salimos corriendo?, como que no estábamos preparadas. Pero es el salto que uno tiene que dar, se tiene que poner dentro de la mochila de mariscal, que ya tenemos varios bastones, agregar un bastón más ¿me entendés?, y andar caminando con eso encima. Es parte de la lucha. (Ana, 30 años, militante Movimiento Evita, 2010)

En ese sentido, Ana insiste categóricamente en la idea antes señalada: «crecimos de un día para otro, la responsabilidad fue mucha, pero yo personalmente me siento contenta. Porque ya te digo, venir de un piquete y que hoy esté yo en una fábrica, y tener cooperativa, y que muchas personas

dependen de tu trabajo uy! Es a veces llegar a tu casa y plantearte ¿en qué momento pasó todo esto? de pasar de estar tirando piedras y hoy tener esta responsabilidad».

Siguiendo esa línea Rosa, compara la cooperativa de trabajo con su experiencia organizativa previa:

No es como en el comedor, que ya los conoces, que es gente que vos venís de años con esos compañeros, que son tus vecinos, ya te sabes los nombres que se llama Cristina, Juan, Claudio ¿viste?, y es diferente al trato de los compañeros de la cooperativa, porque ya ahí no es que nosotros somos jefes, pero hay que tener un límite con los compañeros, y decirles esto se hace así, se respeta el horario, se usa la ropa de trabajo, se cuidan las herramientas...cuando nosotros veníamos de otra cosa. Siempre peleamos por el trabajo digno, que los compañeros tengan su trabajo digno, que dejaran de cobrar el plan social, que se terminaran los comedores y copas de leche en los barrios, que fue por lo que siempre peleamos nosotros (Rosa, 32 años, militante movimiento Evita, abril 2010)

Para Ana y Rosa el proceso de implementación del PRIST y la conformación de cooperativas se tradujo en lo cotidiano en actividades concretas: difundir el programa en su barrio y ayudar a sus vecinos a obtener los requisitos solicitados por el mismo; desarrollar la tarea de «inscripción» de los interesados a través de convocatorias públicas; localizar a los inscriptos que fueron aceptados a través de sucesivas «visitas» a los domicilios de los socios para hacer efectivos los grupos de trabajo. Como resultado de estas acciones cotidianas ambas mujeres, su núcleo familiar, la mayoría de los beneficiarios de un programa de empleo gestionado por el movimiento y también otras personas ajenas al mismo hasta ese momento, se convirtieron gradualmente en socios de cooperativas de trabajo en el transcurso de dos años. Para dimensionar este proceso, podemos señalar que entre 2010 y el año 2012, el Movimiento Evita en Avellaneda, conforma once cooperativas de trabajo, las cuales tienen su sede administrativa en *La Factoría*. Por su parte, los antiguos «emprendimientos productivos», como por ejemplo el taller textil, al constituirse en cooperativa, transformaron en socios a sus trabajadores e incorporaron a otros nuevos en procesos de inscripción que se promovieron a través del PRIST.

Como aparece en la entrevista Ana se representa esas prácticas como «desafíos» que son «parte de la lucha». Una «lucha» que se liga a «los piquetes», a la ocupación de

una fábrica y que ahora se relacionan con nuevas iniciativas en torno a las cooperativas de trabajo. Así lo manifiesta en la cita que sigue:

«Con las cooperativas es donde se vio realmente la fuerza de uno, de una pasión si se quiere. Está el que se ocupa sólo de su trabajo, su horario en la cooperativa y listo. Pero yo creo que no te puedes quedar con eso solamente. Tenemos que ir por más, ir por más significa seguir aguantando, haciendo fuerza para que esto siga avanzando y ahí se trata de la militancia, ¿me entendés?» (Ana, 30 años, militante Movimiento Evita, 2010).

Retomando las palabras de Ana la «militancia» actual del Movimiento Evita, en relación al proceso de organización abierto por las políticas de economía social, se orienta a la formación de organizaciones sindicales. El 20 de diciembre de 2011 se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en la cual confluyen además del Movimiento Evita, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), La Alameda y la Federación de Trabajadores de Cooperativas de Infraestructura Social (FETRACOI), entre otros. La CTEP pretende representar a trabajadores vinculados a diversas formas asociativas y/o actividades informales. Las protestas impulsadas hasta el momento tienen como ejes principales la denuncia de las condiciones de trabajo precarias y los niveles de ingreso de los programas estatales. También están en proceso de construcción demandas sobre los derechos laborales de los trabajadores asociados, tomando como referencia al sector formal y asalariado.¹⁴ En el documento de la convocatoria a la jornada de movilización por el 1º de mayo del año 2013, se plantea el reconocimiento de la etapa histórica abierta en el año 2003 y la pertenencia a un proyecto político:

«Se inició entonces un proceso de recuperación de derechos que abrió un nuevo horizonte para los trabajadores: además de mejorar notablemente los niveles de empleo, recuperamos las paritarias, mejoramos los salarios, logramos una participación más activa del Estado en la economía, se conquistaron nuevos derechos como la Asignación Universal por Hijo, se re-estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones, se amplió significativamente la cobertura de nuestros abuelos, se nacionalizaron algunas empresas estratégicas y vivimos un reverdecimiento de la militancia popular, particularmente entre la juventud».

En ese encuadre se definen los reclamos actuales bajo la consigna «Somos lo que falta»:

«No queremos ser objetos de asistencia sino trabajadores con derechos. Por eso, entregaremos un petitorio al Ministro de Trabajo para solicitar la apertura de una paritaria social donde se discutan los problemas de todos los trabajadores que no estamos representados por los sindicatos con personería gremial ni tenemos convenio colectivo de trabajo, los que no tenemos un salario mínimo vital y móvil, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni ART, ni obra social, ni asignaciones familiares, ni licencias por enfermedad ni ninguno de los derechos que consagra nuestra constitución y las leyes nacionales».¹⁵

En ese sentido, desde su creación la CTEP ha impulsado protestas y otras acciones en relación a las condiciones de trabajo y arbitrariedades de empresas privadas u organismos públicos, a los que se vinculan las actividades de las organizaciones que nuclea. Entre sus demandas, se destacan la de ser reconocidos en el marco de paritarias como entidad gremial y la promulgación de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores «autogestionados», que institucionalice normas que protejan la labor de los mismos. No es azaroso que los reclamos actuales promuevan la regularización de sus condiciones de trabajo y la igualación de derechos con los trabajadores formales, ya que desde mediados del siglo XX los derechos y protecciones sociales se articularon a la condición asalariada y se significaron como «conquistas» en el marco de luchas históricas del movimiento obrero, posibilitando el fortalecimiento de sus organizaciones sindicales. Por otra parte, la última década ha sido un escenario donde las demandas y conflictos de los trabajadores formales han logrado convenios colectivos anuales, aumentos salariales acordes a metas de inflación, reforma de leyes -de accidentes de trabajo, previsional, seguridad social, etc.- entre otros tantos avances significativos que pintan un paisaje diferente para la acción colectiva de los trabajadores informales.

Desde esta perspectiva el ciclo que comienza con el gobierno de Néstor Kirchner representa un punto de inflexión respecto de la orientación neoliberal de las políticas socio-laborales previas, en la medida que supuso la articulación de un arco de solidaridades diferentes y la disponibilidad de nuevos recursos para la organización política. Los gobiernos kirchneristas abrieron un campo de oportunidades para la construcción colectiva popular con el reconocimiento de actores sociales que habían participado de los procesos de

resistencia social al neoliberalismo, como así también a partir de la recuperación efectiva de viejos derechos laborales y la creación de nuevos derechos para grupos anteriormente desprotegidos -como los trabajadores rurales o los trabajadores domésticos-. En este sentido, las organizaciones populares ponen en juego un lenguaje que enlaza el trabajo digno y derechos, que conjugan prácticas sedimentadas y horizontes para la construcción de nuevas expectativas a partir de las lecturas que habilita el presente.

Referencias bibliográficas

ANTÓN, Gustavo y otros. (2010). «Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina». *Observatorio Social de América Latina* 28 (pp. 25-118).

BORÓN Atilio (2007). «Identidad, subjetividad y representación». En Villanueva Ernesto y MASSETTI Astor (comps.) *Movimientos sociales en la Argentina de hoy* (pp. 27-41). Buenos Aires: Prometeo.

CORAGGIO, José Luis (2008). «América Latina: necesidad y posibilidades de otra economía». *Revista Otra Economía* II (2), pp.8-11.

CREHAN, Kate (2004). *Gramsci, Cultura y Antropología*. Barcelona: Bellaterra

DANANI, Claudia (comp.) (2004). *Política Social y Economía Social: Debates fundamentales*. Buenos Aires: UNGS, OSDE, Altamira.

DAS, Veena and POOLE, Deborah (2004): «State and Its Margins. Comparative Ethnographies». En *Anthropology in The Margins of The State*, pp.3-34. Santa Fe-Oxford: School of American Research Press & James Currey.

DELEDICQUE, Melina y otros (2005). «Recuperación de empresas por sus trabajadores y autogestión obrera. Un estudio de caso de una empresa en Argentina». *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa* N.º 51, pp.51-76

DEUXMARZI, María Victoria y VÁZQUEZ, Gonzalo (2009). «Emprendimientos asociativos, empresas recuperadas y economía social en la Argentina». *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*. FLACSO sede Ecuador, N.º 33, pp. 91-102.

ETCHEMENDY, Sebastián y COLLIER, Ruth (2008). «Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003/2007)». *Postdata* 13, pp.146-192.

FASSIN, Didier (2003). «Gobernar por los cuerpos. Políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia». *Cuadernos de Antropología Social* 17, pp. 49-78.

FERNÁNDEZ ALVAREZ, María Inés (2009). «Expropiar la fábrica, apropiarse del trabajo. Procesos de construcción de demandas y prácticas de acción estatal en recuperaciones de fábricas de la Ciudad de Buenos Aires». En: GRIMBERG, Mabel, FERNÁNDEZ ALVAREZ María Inés Y CARVALHO Rosa, M. (eds.). *Estado y movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*. (pp.131-156) Buenos Aires: Antropofagia.

FERRAUDI CURTO, M. Cecilia (2005). «Lucha y papeles: Categorías de enfrentamiento en torno a la distribución de recursos en una organización de desocupados del Sur del Gran Buenos Aires». Buenos Aires: Mimeo.

FREDERIC, Sabina (2004). *Buenos Vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.

GLEDHILL, John (2000). *El Poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política*. Barcelona: Bellaterra.

GÓMEZ, Marcelo (2010). «Acercas del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis». En: MASSETTI, Ernesto, VILLANUEVA Astor y GÓMEZ, Marcelo (eds.). *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario*, pp. 65-94. Buenos Aires: Nueva Trilce.

GRASSI, Estela (2012). «La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea». *Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 10 (39), pp. 5-34.

GRIMBERG, Mabel (1997). *Demanda, negociación y salud. Antropología social de las representaciones y prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras-CBC/UBA.

GRIMBERG, Mabel (2009). «Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el Área Metropolitana de Buenos Aires». *Revista de Sociología e Política* N.º 3, pp.83-94.

GUERRA, P. (2007) «¿Cómo denominar a las experiencias económicas solidarias basadas en el trabajo? Diálogos entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual». *Revista Otra Economía* 1 (1), pp. 21-27.

GUSMEROTTI, Lucrecia (2010). «Estar adentro. Dispositivos de intervención estatal y modalidades de acción colectiva. Análisis de una experiencia de gestión estatal de organizaciones populares». *Revista Cuestiones de Sociología* N° 5-6, pp.185-202.

GUSMEROTTI, Lucrecia (2013). «Interacciones entre el Movimiento Evita y el Estado. Reflexiones en torno al proceso de conformación de cooperativas de trabajo». En: RETAMOZO, Martín, SCHUTTENBERG, Mauricio y VIGUERA, Anibal (comps.). *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp.235-260) La Plata: EDULP.

HOPP, Malena (2012). «La sostenibilidad de los emprendimientos asociativos y autogestionados: Reflexiones para la construcción de la economía social en Argentina». *Revista Org y Demo* 12 (2), pp.39-58.

HINTZE, Susana (2010). «Notas sobre el sistema de reproducción del trabajo asociativo autogestionado». *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes* 2 (18), pp. 31-46.

NATALUCCI, Ana (2009). «Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales». *Revista Laboratorio* N.º 23, pp. 90-108.

MANZANO, Virginia (2007), «Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación. Antropología de campos de fuerzas sociales» (pp.101-133). En CRAVINO María Cristina (ed.) *Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y movimientos sociales en el área metropolitana de Buenos Aires*, (pp.101-133). Buenos Aires: UNGS.

MANZANO, Virginia (2009). «“Piquetes” y acción estatal en Argentina: un análisis etnográfico de la configuración de procesos políticos». En: GRIMBERG, Mabel, FERNÁNDEZ ALVAREZ, María Inés y CARVALHO, Rosa M. (eds.). *Estado y movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil* (pp.15-36). Buenos Aires: Antropofagia.

MASSETTI, Astor, VILLANUEVA Ernesto (eds.) (2010). *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

MERKLEN, Denis (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.

NEUFELD, María Rosa y otros (2002). «Sociabilidad y micropolítica en un barrio bajo planes». En: ANDRENACCI, Luciano (org.) *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*. (pp.57-80). Buenos Aires: Al Margen.

PALOMINO, Héctor (2010) «La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precarización a la regulación». *Revista latinoamericana de estudios del trabajo*, pp. 121-145.

PANTALEÓN, Jorge (2004). *Entre la carta y el formulario. Política y Técnica en el desarrollo social*. Buenos Aires: Antropofagia.

QUIRÓS, Julieta (2011). *El porqué de los que van: peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. (Una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.

ROFFMAN, Alejandro, GARCÍA, Inés y DI LORETO, María (2004). «Autogestión de los trabajadores. Una experiencia en expansión para enfrentar el desempleo urbano: el caso Argentino». En: *Cuadernos Prolam/USP* 3 (1), pp. 67-95.

ROSEBERRY, William (2002). «Hegemonía y lenguaje contencioso». En JOSEPH, Gilbert y NUGENT, Daniel (comps.). *Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno* (pp. 213-226). México D.F.: Era.

SCHUSTER, Federico (comps.). (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

SHORE, Cris & WRIGHT, Susan (eds.) (1997). *Anthropology of politics. Critical perspectives on governance and power* (pp. 195-216). London & New York: Routledge.

SVAMPA, Maristella (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

SVAMPA, Maristella y PEREYRA, Sebastián. (2003). *Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

TROUILLOT, Michael (2001). «The Anthropology of the State in the Age of Globalization». *Current Anthropology* 42 (1), pp. 125-138.

VINCENT, Joan (2002). *The anthropology of politics. A reader in ethnography, theory and critique*. Oxford: Blackwell Publishers.

WYCZYKIER, Gabriela (2009). *De la dependencia a la autogestión laboral. Sobre la reconstrucción de experiencias colectivas de trabajo en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

ZAPATA, Laura (2005). *La Mano que acaricia la pobreza. Etnografía del voluntariado católico*. Buenos Aires: Antropofagia.

Referencias electrónicas

CAMPIONE, Daniel y RAJLAND, Beatriz (2006). «Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante». En Caetano, G. (comp.): *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (pp. 297-230). Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/grupos/caeta/PIICtres.pdf>>

DAL RI, Neusa y VIELTEZ, Cándido (2009). Trabajo Asociado: Gestión democrática y cambio social. *Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestión* N.º1. Recuperado de <<http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/>>

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) (2015) «Estadísticas Cooperativas». Recuperado de <http://www.inaes.gob.ar/?page_id=2839>

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) (2015) «Estadísticas Argentina Trabaja». Recuperado de <http://www.inaes.gob.ar/?page_id=2843>

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) (2015). «Estadísticas cooperativas por objeto social». Recuperado de <http://www.inaes.gob.ar/?page_id=2841>

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) (2015) Resolución del INAES N.º 3026/06. Recuperado de <http://www.inaes.gob.ar/?page_id=702>

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) (2015) Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N.º 3182/09. Recuperado de <http://www.inaes.gob.ar/?page_id=6304>

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2012). «Distribuidor Programa de Ingreso Social con Trabajo». Recuperado de <<http://www.desarrollosocial.gob.ar/ingresosocialcontrabajo>>

REBÓN, Julián. y SALGADO, Rodrigo (2009). «Desafíos emergentes de las empresas recuperadas: de la imposibilidad teórica a la práctica de la posibilidad». *Observatorio de la Economía Latinoamericana* N° 119. Recuperado de <<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/>>

VUOTTO, Mirta (2008). «El alcance de las estrategias gubernamentales de promoción de la economía social en la Argentina». *XXVII Congreso Internacional del CIRIEC*. Recuperado de <<http://conference.se-es.ca/wp-content/uploads/2008/02/mirta-vuotto-re.pdf>>

Notas

1 Algunas de estas elaboraciones se expusieron en: Lucrecia Gusmerotti, 2013. «Iniciativas políticas y movilización de demandas en la economía social». Lucrecia Gusmerotti y Villar Lidia, 2013. «Trabajo asociativo y construcción de demandas. Cooperativas de trabajo vinculadas al Movimiento Evita y al frente popular Darío Santillán en el marco del PRIST».

2 Esta producción se inscribe a su vez en líneas de análisis que desde hace varios años se desarrollan en proyectos colectivos de investigación que integro en la UNLP: «Identities, discourses and political practices of popular sectors in Argentina post 2003: theoretical perspectives, analytical approaches and case studies» y también en la UBA: «Política, políticas y politización de la vida cotidiana. Un estudio etnográfico de los modos de relación entre Estado y conjuntos subalternos en el Área Metropolitana de Buenos Aires».

3 Como el Plan Trabajar I y II de 1996-1997, el Plan de Emergencia Laboral de 1999 y, el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados de 2002

4 En base a cooperativas re-empadronadas años 2006-2007. Cfr. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (2008). *Las cooperativas y Mutuales en la Argentina: re-empadronamiento nacional y censo sectorial de cooperativas y mutuales*.

5 Estadísticas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). www.inaes.gov.ar, consultado el 26/10/2015.

6 El Programa apunta a la creación de trabajo por medio de la conformación de cooperativas regidas por la resolución 3026/06 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Está dirigido a personas pertenecientes a hogares en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, que no cuentan con otros ingresos provenientes de trabajo registrado, prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingreso nacionales o provinciales. El PRIST, se implementa en los cordones periféricos de los aglomerados urbanos más vulnerables sus cooperativas están vinculadas a proyectos de mejora de espacios públicos en el marco de convenios con gobiernos municipales, provinciales u organismos nacionales. Quienes integran la cooperativa cuentan con una jornada de trabajo de 40hs semanales. Cinco de esas horas deberían estar destinadas a jornadas especiales de capacitación específica sobre cooperativismo y oficios y, de capacitación integral sobre diferentes temáticas orientadas según las necesidades y problemáticas barriales. Cuentan con un sistema de control de asistencia que permite las bajas y reemplazos de los trabajadores por incumplimiento. La remuneración se realiza por sistema bancario a través de una tarjeta bancaria personal. Los cooperativistas se encuentran inscriptos como efectores sociales por lo que en teoría, tienen acceso al monotributo social, que les garantiza aportes jubilatorios y una obra social extensible al grupo familiar. Al ser monotributistas sociales, tienen derecho a la Asignación Universal por Hijo.

7 Datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Consultado en: <www.inaes.gov.ar>

8 Cfr. «MTD Resistir y Vencer. Inaugura su fábrica». Consultado en: <<http://www.lafogata.org/02asambleas/12asambleas/mtd.htm>>

9 La información, sobre los contenidos de esas reuniones que los dirigentes sostuvieron en la Casa Rosada con el presidente N. Kirchner, fue obtenida en el contexto de la realización de entrevistas a dirigentes del Movimiento Evita Avellaneda durante el año 2009 en el marco de la investigación.

10 Documentos: «La Hora de los Pueblos». Frente de Organizaciones Populares (Junio 2004); «Por la recuperación del trabajo y la justicia social». FOP (Julio 2004); «Diez puntos para la unidad de las fuerzas populares». Frente Patria para Todos (Diciembre 2004).

11 En el Movimiento Evita, confluyen el MTD Evita, el MTD Resistir y Vencer, el Movimiento Patriótico 20 de Diciembre, el Movimiento Peronista Auténtico, la Corriente Sanitaria Federal Ramón Carrillo, El Partido Proyecto Popular, el Movimiento Norte Grande, Frente de Todos, y Unión por

Neuquén, la Corriente Peronista Federal Bonaerense, etc. Otros movimientos acompañaron este proceso de articulación pero finalmente no se fusionan, como la organización Martín Fierro y el Frente Barrial 19 de Diciembre, y el Movimiento Octubre.

12 Programa «Guardapolvo Social», de la Dirección General de Escuelas, Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y Programa «Guardapolvo», del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

13 En el trabajo de campo, los sujetos distinguen entre diferentes tipos de cooperativas en las que han tenido participación. Las cooperativas «municipales» o las de las «movimiento». Las municipales fueron las primeras en las cuales tuvieron algún grado de participación. En tanto éstas se originaban en programas nacionales, destinados a obra pública local, dichas cooperativas estaban supervisadas y administradas por los municipios. Los movimientos, sólo incorporaban algunos trabajadores durante el desarrollo acotado de esas obras. Las cooperativas que crea el movimiento en Avellaneda, recién se constituyen en el año 2010. La mayoría de éstas, impulsadas por la dinámica del PRIST.

14 Documentos y noticias publicados por la CTEP. «Nos preparamos para el 20 de diciembre» <http://ctep-argentina.blogspot.com.ar/2011/11/nos-preparamos-para-el-20-de-diciembre.html>. Consultado 10/07/2012. «La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular le acercó sus propuestas a Alicia Kirchner». <http://ctep-argentina.blogspot.com.ar/2011/12/la-confederacion-de-trabajadores-de-la.html>. Consultado 10/07/2012. «Estado de alerta, movilización y asamblea por discriminación en el programa Argentina Trabaja» <http://ctep-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/estado-de-alerta-y-movilizacion.html> Consultado el 01/08/2012. «La CTEP marcha junto a los artesanos y trabajadores de la vía pública» <http://ctep-argentina.blogspot.com.ar/2011/11/la-ctep-marcha-junto-los-artesanos-y.html>. Consultado el 11/07/2012. «Otro paso para la inscripción del Sindicato de trabajadores de la Economía Popular» Consultado 12/09/2013. <http://cadenaprovincial.com.ar/la-ctep-se-moviliza/>

15 «Documento «¡Somos lo que falta!» <http://ctep-argentina.blogspot.com.ar/2013/04/somosloquefalta.html> Consultado 6/5/2013